

áncoas situada dentro de los límites del municipio de S. Sebastian Progreso; que para hacer efectivo el pago del impuesto mencionado, ha embargado la autoridad municipal de Huajuapam varios efectos al solicitante; que de la esposicion de estos hechos, se infiere que el primer acuerdo fué publicado con anterioridad al hecho que motivó este recurso, que no fue variado por el segundo en lo sustancial; que este acuerdo no puede tener val r alguno fuera de la jurisdiccion del municipio de Huajuapam; que con intentar ejecutarlo en otro municipio, se ha violado una de las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitucion, por ser incompetente, en el caso, el Ayuntamiento contra cuyas disposiciones se solicita el amparo.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes y por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que ampara al C. español José Gomez.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To- ca. Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 29 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Norte de Tamaulipas por el Administrador de la Aduana fronteriza de Reynosa, C. Juan M. Gonzalez, por sí, y como personero del Comandante y Celadores de aquel Resguardo, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Matamoros, Febrero 20 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el Administrador de la Aduana fronteriza de Reynosa, C. Juan M. Gonzalez, por sí y como personero del Comandante y Celadores de aquel Resguardo, CC. Ignacio Laras, Victoriano Dávalos, Mariano Cedillo y Alejo Vanegas, contra el acto del comisionado de las Agencias fiscales de las Villas del Norte, C. Rafael Zúñiga, que los requirió por adeudo de contribuciones sobre sus sueldos como empleados de la federacion, y por cuotas de excepciones del servicio en la Guardia Nacional, impuestas por leyes del Estado, con lo que reputan violadas sus garantías individuales, é invadida la esfera de la autoridad federal. Vistos, el poder de fojas seis que el promovente exhibió para acreditar su personalidad, sustituyéndolo luego en el C. Guadalupe Fernandez; el auto de fojas 3 vuelta, decretando la inmediata suspension del acto reclamado; el informe constante á fojas 28 vuelta, de la autoridad ejecutiva; lo pedido por el Ministerio público; el alegato de la parte actora, y

Considerando: que por el art. 117 de la Constitucion de la República, solo "se entienden reservadas á los Estados aquellas facultades que no le estan expresamente concedidas en el propio Código á los funcionarios federales."

Que el disminuir las dotaciones de los empleos públicos de la federacion, es facultad concedida al Congreso, expresa en la fraccion undécima del art. 72 de la citada

Constitucion, y en consecuencia no la tienen los Estados.

Que someter al pago de contribuciones el sueldo del empleado, es real y positivamente disminuirle su dotacion, porque aunque materialmente no se altere así la cantidad que el presupuesto le designa, de hecho no la percibe íntegra el causante.

Que por lo tanto, los Estados respecto de los empleos públicos de la federacion, no pueden ejercer tal facultad por ninguno de sus poderes, visto lo absoluto de la prohibicion, si es que los preceptos constitucionales deben salvarse en su esencia y no solo en su letra.

Que impidiendo que el cobro se consume, no se ataca su soberanía, porque ella debe en su esfera conformarse con su art. 1º del Pacto de 1857, en donde se declara: que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitucion, y en el art. 4º que reconoce ser los Estados libres y soberanos en su régimen interior; pero unidos en una federacion establecida, según los principios de esta ley fundamental.

Que es tambien otra de las facultades concedidas al Congreso en la fraccion 19 del art. 72, "dar reglamentos con el objeto de organizar la Guardia Nacional, reservando únicamente á los Estados la de instruirla conforme á la disciplina prescrita en dicho reglamento."

Que de aquí se deduce; que establecer si ha de haber cuotas de excepcion de ese servicio, su monto, cual sea la manera de exigir las, y la autoridad encargada de cobrarlas, es peculiar de la Cámara de la Union, y por no haberlo reglamentado hasta esta fecha no puede el Estado ingerirse en ello, sino invadiendo la esfera de la autoridad federal; aplicando á este segundo punto lo expuesto en los considerandos primero, cuarto y quinto precedentes, y con fundamento de la fraccion 3ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los

CC. Juan M. Gonzalez, Ignacio Flores, Victorio Davalos, Mariano Cedillo y Alejo Vanegas, contra el requerimiento que les hizo el comisionado de las agencias fiscales de las Villas del Norte, por paga de contribuciones sobre sueldos que disfrutaban los quejosos como empleados de la federacion, y de cuotas de excepcion de Guardia Nacional, impuestas por leyes del Estado.

Hágase saber; publíquese, y con el expediente original, elévese á la Suprema Corte de Justicia en revision.

Así definitivamente juzgando y sentenciando lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas, Lic. Manuel Mendiola, por ante mí. Day 16.—*Manuel Mendiola.*—*Felipe N. Garza y Garza*, secretario.

Es copia que certifico. H. Matamoros, Febrero 26 de 1874.—*Felipe N. Garza y Garza*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 21 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros en el Estado de Tamaulipas, por el C. Juan M. Gonzalez, por sí y como personero del Comandante y Celadores del Resguardo de la Aduana fronteriza de Reynosa, CC. Ignacio Flores, Victoriano Dávalos, Mariano Cedillo y Alejo Vanegas, contra el acto del comisionado de las Agencias fiscales de las Villas del Norte, C. Rafael Zúñiga, que los requirió por adeudo de contribuciones, sobre sus sueldos como empleados de la federacion, y por cuotas de excepciones en el servicio de la Guardia Nacional, impuestas por leyes del Estado, con lo que se reputan violadas las garantías individuales e invadida la esfera de la autoridad federal.

Visto el parecer fiscal; la sentencia del Juzgado de Distrito; con fundamento de

los arts. 101 y 102 de la Constitución se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los quejosos.

Divulguense sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nádera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 11 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

COMPETENCIA

Promovida entre el Juez de Distrito de Veracruz y el de 1ª instancia del canton de la misma, para conocer del juicio ejecutivo que el apoderado de la Sra. Albacea de D. Francisco Sales Bera, ha entablado contra la casa núm. 940 de la calle de la Condesa, de esta ciudad.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice:

Que el Juzgado 1º de 1ª instancia del canton de Veracruz, ha suscitado competencia al de Distrito de la misma, para conocer del juicio ejecutivo que el apoderado de la Sra. Albacea de D. Francisco Sales Bera ha entablado contra la casa núm. 940,

de la calle de la "Condesa" de esta ciudad perteneciente á la testamentaria de Doña María Josefa Puertas, siendo su Administrador D. José Mariano Fernandez. Siguiendo el juicio ejecutivo por sus respectivos trámites, el expresado Juez de Distrito de Veracruz pronunció sentencia de remate, con fecha 30 de Diciembre de 1872, quedando ejecutoriada por no haber interpuesto contra ella ningun recurso la parte ejecutada. En 13 de Enero de 1873, el Juez de 1ª instancia del canton de Veracruz, promoviendo competencia al de Distrito para conocer de la expresada demanda, le libró el exhorto respectivo, y no habiéndolo conformado entre sí ninguno de los Jueces competidores, con las razones que mutuamente se expusieron, han elevado sus respectivas actuaciones á esta Suprema Corte á fin de que se sirva dirimir el conflicto jurisdiccional que entre ellos se ha suscitado. El suscrito encuentra en el caso tan fundado y arreglado á derecho el informe que ante esta Sala ha rendido el C. Juez de 1ª instancia del Canton de Veracruz, que no vacila en hacerlo suyo y reproducirlo aquí en calidad de pedimento fiscal, fijándose sobre todo en los fundamentos y consideraciones legales que esa Suprema Corte tuvo presentes al fallar la competencia promovida contra el Juez de 1ª instancia del Canton de Córdoba, y el referido de Distrito de Veracruz, para conocer de la demanda instaurada por D. Pedro Tognio, como apoderado de D. Pedro Casté, contra D. Ramon Garay, sobre pago de capitales que reconocía la Hacienda del Cacahuatal.

El Fiscal en consecuencia, y por los fundamentos que allega el Juez de 1ª instancia del Canton de Veracruz, y por los contenidos en la ejecutoria que acabo de citar, concluyo:

Unicar. Se declara que el Juez de 1ª instancia del Canton de Veracruz, es el competente para conocer del juicio ejecutivo que el apoderado de la Sra. Albacea de D. Francisco Sales Bera, ha entablado con-